

La caída de la Alianza. Neoliberalismo, conflicto social y crisis política en Argentina

Sebastián P. Salvia
Universidad de Buenos Aires (Argentina)

DOI: [dx.doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.04](https://doi.org/10.7440/colombiaint84.2015.04)

RECIBIDO: 1º de junio de 2014

APROBADO: 6 de noviembre de 2014

MODIFICADO: 25 de noviembre de 2014

RESUMEN: El artículo aborda la crisis política de 1999-2001 en Argentina, bajo el Gobierno de la Alianza, que sucedió al Partido Justicialista tras la introducción de las reformas neoliberales en los noventa. Analizamos la continuidad de las políticas neoliberales de gestión de la crisis, el ascenso de la conflictividad social y la supervivencia de prácticas de corrupción, que llevaron a la Alianza a un inédito proceso de desintegración interna y deslegitimación social. La crisis política se agravó con el fuerte crecimiento del voto negativo y la derrota de la Alianza en las elecciones legislativas de octubre de 2001, y finalizó con una rebelión popular que derribó al Gobierno en diciembre, en una situación de depresión económica y bancarrota financiera.

PALABRAS CLAVE: Argentina • Alianza • neoliberalismo • crisis económica • crisis política • conflicto social

El artículo reelabora y amplía una parte de mi tesis de doctorado inédita, cuyo título es “Conflictos y alianzas de la burguesía industrial en la crisis de la Convertibilidad en Argentina (1998-2002)”. Agradezco a Alberto Bonnet y Adrián Piva por su inestimable colaboración en el proceso de investigación.

The Fall of the *Alianza*. Neoliberalism, Social Conflict, and Political Crisis in Argentina

ABSTRACT: This article addresses the political crisis in Argentina in 1999-2001, under the government of the *Alianza* which succeeded the Justicialist Party following the introduction of neoliberal reforms in the nineties. We analyze the continuity of neoliberal policies of crisis management, the rise in social conflict and the survival of corrupt practices that led the *Alianza* towards an unprecedented process of internal disintegration and social delegitimization. The political crisis was aggravated by the large increase in negative voting and the *Alianza's* defeat in the legislative elections of October 2001, and ended with a popular uprising that toppled the government in December, in a context of economic depression and financial bankruptcy.

KEYWORDS: Argentina • *Alianza* • neoliberalism • economic crisis • political crisis • social conflict



A queda da *Alianza*. Neoliberalismo, conflito social e crise política na Argentina

RESUMO: Este artigo aborda a crise política de 1999-2001 na Argentina, sob o Governo da *Alianza*, que sucedeu o Partido Justicialista depois da introdução das reformas neoliberais nos noventa. Analisamos a continuidade das políticas neoliberais de gestão da crise, a ascensão do conflito social e a sobrevivência de práticas de corrupção que levaram a *Alianza* a um inédito processo de desintegração interna e deslegitimação social. A crise política se agravou com o forte crescimento do voto negativo e da derrota da *Alianza* nas eleições legislativas de outubro de 2001 e finalizou com uma rebelião popular que derrubou o Governo em dezembro, em uma situação de depressão econômica e bancarrota financeira.

PALAVRAS-CHAVE: Argentina • *Alianza* • neoliberalismo • crise econômica • crise política • conflito social

Introducción

La crisis argentina de 1999-2001 fue un punto de llegada de desequilibrios económicos, conflictos sociales y procesos políticos que se desarrollaron en el período de auge del neoliberalismo en el país. El Partido Justicialista (PJ) asumió anticipadamente el Gobierno en julio de 1989, en medio de una crisis hiperinflacionaria que tuvo efectos destructivos en la economía y las capacidades de acción estatales, y finalizó con la renuncia del presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR). El gobierno de Carlos Menem (PJ) implementó una serie de reformas neoliberales, inscriptas en un proceso global que promovía la reestructuración capitalista (Brenner 1998). El fuerte crecimiento económico y la estabilidad de precios sustentaron la hegemonía neoliberal, es decir, el consenso social en torno a este programa de reformas neoliberales (Bonnet 2008).

La Ley de Convertibilidad de 1991, impulsada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y la Ley de Reforma del Estado, sancionada en los inicios del Gobierno, fueron la base de las reformas neoliberales. La primera ley fijaba el tipo de cambio en la paridad $\$1 = \text{US}\1 , eliminaba la posibilidad de indexación y restringía la emisión monetaria al nivel que permitían las reservas de divisas del Banco Central (Bonnet 2008). Con un tipo de cambio fijo, la inflación interna de los dos primeros años del Plan de Convertibilidad apreció considerablemente el tipo de cambio real (Hopenhayn, Schvarzer y Finkelstein 2002). La segunda ley habilitaba al poder ejecutivo a privatizar las empresas estatales, eliminar regulaciones de la actividad privada y eliminar o reducir impuestos. La privatización de empresas estatales alcanzó una celeridad y una intensidad únicas en la región (Bonnet 2008), y la desregulación incluyó la eliminación de instituciones que regulaban al sector privado, como las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes (Lattuada 2006). Además, fueron eliminados los derechos de exportación y se habilitó el ingreso de las semillas transgénicas y la tecnología asociada a ellas, facilitando el incremento de la productividad agraria (Salvia 2014). Asimismo, se redujeron los aranceles a la importación, lo que facilitó una intensa incorporación de bienes de capital e insumos importados en la industria (Martínez, Lavarello y Heymann 1998). Las reformas neoliberales no implicaron un debilitamiento del Estado, en tanto las capacidades de acción estatales se reforzaron con la acumulación de

capital. El ciclo expansivo de la economía finalizó en el cuarto trimestre de 1998, con el inicio de la crisis económica más profunda de la historia argentina. Originada durante los cambios en las condiciones del mercado mundial tras las crisis asiáticas y rusa de 1997-1998 (Eskenazi 2009), la crisis se agravó con la devaluación del real brasileiro en enero de 1999, luego de un semestre de intensa fuga de capitales (Filgueiras 2012).

En paralelo al crecimiento económico, y aún más con el inicio de la crisis, las reformas neoliberales generaron el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora, que se tradujo en el aumento del desempleo y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.¹ Como respuesta, en la primera mitad de los noventa se produjo un ciclo ascendente de la protesta social, protagonizado principalmente por los trabajadores ocupados. Luego, se desarrolló un ciclo de baja de la conflictividad social, en el que tomaron protagonismo los trabajadores desocupados. Junto con reiteradas denuncias de corrupción de los funcionarios, estos procesos erosionaron la legitimidad del gobierno menemista.

La Alianza se presentó en sociedad en 1997, unificando a los dos principales partidos opositores, la UCR y el Frente País Solidario (Frepasso). Esta coalición logró capitalizar el descontento social con el Gobierno, al que derrotó en las elecciones legislativas de ese año. El ascenso de la Alianza culminó en el triunfo en las elecciones presidenciales de 1999, coronando la fórmula Fernando de la Rúa (UCR)-Carlos “Chacho” Álvarez (Frepasso). La Alianza logró 10 puntos porcentuales de diferencia sobre el PJ, venciendo en la mayoría de los distritos. Pero, desde el Gobierno, la Alianza generó la más acelerada pérdida de consenso social desde el retorno de la democracia. Solo dos años después de su triunfo electoral, el Gobierno de la Alianza caía en medio de una insurrección popular, a la que no pudo contener, aun con la suspensión de las garantías constitucionales, en diciembre de 2001.

1 La tasa de desocupación pasó del 6,3% de la población económicamente activa (PEA) en octubre de 1990 al 13,8% en octubre de 1999; en igual lapso, la tasa de subocupación horaria pasó del 9,8% al 14,3%. Asimismo, la remuneración de los trabajadores asalariados se redujo del 44,7% del valor agregado en 1993 al 40,7% en 1999; en igual lapso, el excedente de la producción creció del 33,7% al 42,7% (datos de INDEC).

Esta crisis política ha despertado el interés de las ciencias sociales argentinas. Pucciarelli (2004) y De Luca (2007) centran su análisis en el desgranamiento interno de la Alianza, y sostienen que se derivaba de la imposibilidad de cumplir con las expectativas generadas en las elecciones, ligadas a la reactivación económica, la mejora de la situación social y el fin de la corrupción. Schamis (2002) afirma que los principales dirigentes del Frepaso y la UCR dejaron el Gobierno, y que este abandono de la Alianza se extendió a los votantes del Frepaso, un partido progresista surgido del rechazo al viraje neoliberal del PJ, a principios de los noventa. Torre (2003) señala que en la desafección de los votantes del Frepaso influyeron la recesión, los altos niveles de pobreza y las denuncias de corrupción. Cheresky (2003), por su parte, analiza las elecciones de 2001, y concluye que estas mostraron el rechazo ciudadano al sistema político y el debilitamiento del tradicional bipartidismo argentino. Sidicaro (2006) concentra la mirada en la continuidad de las políticas económicas neoliberales y el creciente peso del sector financiero y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Beltrán (2014) analiza la acción de las asociaciones empresarias, y sostiene el fin del apoyo empresario a la convertibilidad antes de su caída, en 2001. Delamata (2002) y Farinetti (2002) indagan sobre el lugar de la protesta social, y afirman que fue el crecimiento de la misma lo que llevó a un colapso del sistema de partidos a fines de 2001. En la misma línea, Iñigo Carrera y Cotarelo (2003) muestran la importancia del ciclo de alza de la lucha popular en la crisis, que condujo a la “insurrección espontánea” que derribó al Gobierno en diciembre de 2001. Finalmente, Holloway (2002) postula que esta rebelión popular impugnaba todo el sistema político, y que se tradujo en la consigna “que se vayan todos”.

Los textos mencionados abordan aspectos importantes de la crisis y resultan antecedentes relevantes para nuestro trabajo. Nuestra hipótesis es que en la acelerada pérdida de legitimidad política y la trágica caída de la Alianza confluyeron distintos procesos: en primer lugar, la recurrencia de las políticas de ajuste, que resultaban ineficaces para ordenar las cuentas públicas y destructivas para la actividad económica; en segundo lugar, el ascenso de la protesta social ante las políticas de ajuste y el deterioro económico, que el Gobierno de la Alianza fue incapaz de contener; en tercer lugar, la continuidad de políticas asociadas al Gobierno anterior, como las prácticas de corrupción o la flexibilización laboral. Señalamos que la necesidad del estudio de la crisis radica en su carácter

disruptivo para la política argentina, y que su aproximación resulta imprescindible para entender el ciclo posneoliberal que le sobrevino. En las páginas que siguen buscamos reconstruir las determinaciones de esta crisis política.

1. La Alianza en el ejercicio del Gobierno: continuidad neoliberal y crisis política

La asunción de la Alianza puso fin a una década de gobierno del PJ, un período que constituyó el auge del neoliberalismo y en el que se inició la crisis. Desde los primeros intentos de conformación en 1996-1997, la Alianza fue limando sus críticas al neoliberalismo. El Frepaso había nacido con un discurso contrario a las reformas neoliberales, pero había ido moderando sus críticas y haciendo foco en las denuncias de corrupción e impunidad, lo que contribuyó a su éxito electoral (Novaro y Palermo 1998). En la UCR existía una importante corriente interna que se identificaba con el expresidente Raúl Alfonsín, que había impulsado la conformación de la Alianza e intentado darle un discurso antineoliberal (Dikenstein y Gené 2014). De cara a las elecciones presidenciales, la Alianza debió minar las críticas del alfonsinismo, a lo que contribuyeron especialmente los principales dirigentes del Frepaso, Carlos “Chacho” Álvarez y Graciela Fernández Meijide. Como afirma Bonnet (2008), la principal victoria del menemismo fue la modificación del perfil político-ideológico de la Alianza a su imagen y semejanza.

Desde el Gobierno, la Alianza mantuvo las reformas neoliberales e intentó avanzar en algunas de ellas, como la flexibilización laboral. Al mismo tiempo, profundizó las políticas de ajuste fiscal que había llevado a cabo el menemismo, lo que contribuyó al crecimiento de la protesta social. Antes de finalizar el primer año, la Alianza ya estaba sumida en una crisis interna sin precedentes para un período tan corto de gobierno, que la deslegitimó ante sus bases e inició el camino de su desintegración.

a. La Alianza y la continuidad neoliberal ante las elecciones presidenciales de 1999

La bibliografía sobre el período ha señalado la campaña electoral de 1999 como el punto culminante del “vaciamiento de la política”; es decir, un proceso que conducía a la carencia de proyectos alternativos que organizaran la disputa política,

fundamentado por un discurso sobre los estrechos márgenes de acción que dejaban la situación económica y el contexto internacional (Pucciarelli 2004). Los partidos políticos buscaban un voto con menos determinaciones estructurales, más coyuntural y volátil, centrado en la imagen personal de los candidatos, con los medios masivos de comunicación como forma principal de expresión (Abal Medina 2004). En este contexto, las diferentes fuerzas políticas y sus candidatos competían por mostrarse como la mejor opción para mantener el modelo económico, con algunos matices. La Alianza era la principal fuerza opositora y tenía mayores posibilidades de ganar la elección presidencial. Las críticas al Gobierno se limitaban a la corrupción de los funcionarios y las consecuencias sociales del modelo económico, como el crecimiento del desempleo, mientras garantizaba la continuidad de la Convertibilidad. De la Rúa centraba sus propuestas económicas en reducir el déficit fiscal, para recuperar la confianza de los inversores, bajar el riesgo país y mantener el crédito externo. Estas políticas, junto a planes de infraestructura y construcción de viviendas, generarían la reactivación económica (De la Rúa 1999). Así, se presentaba como garante de la Convertibilidad y adalid de la lucha contra la corrupción, la principal fuente de deslegitimación del Gobierno saliente.

El candidato del PJ, Eduardo Duhalde, había iniciado su campaña con un discurso productivista, crítico de la Convertibilidad y del rol del FMI y el endeudamiento externo. Dados sus vínculos con dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), Duhalde había empezado a presentarse como el candidato de un acuerdo entre capital y trabajo, en un momento de crisis en el que se reducían las bases materiales para este acuerdo. Sin embargo, Duhalde abandonó sus críticas con el avance de la campaña, afirmando ser la mejor alternativa para defender la Convertibilidad, por ser el candidato del PJ; algo razonable, dado el consenso que existía en la población en torno a este régimen monetario (Wainer 2010). En ese camino, Duhalde se alejaba de las visiones heterodoxas, afirmando que para lograr la reactivación económica no debía promoverse el gasto del Estado sino el equilibrio fiscal, para bajar el riesgo país y las tasas de interés (Salvia 2012). En este sentido, la ambigüedad de su discurso complicó sus posibilidades de éxito electoral.

Desde un pequeño partido denominado Acción por la República (AR), Domingo Cavallo intentaba quebrar el tradicional bipartidismo argentino. Cavallo defendía la Convertibilidad y buscaba bajar el gasto público. Proponía

un conjunto de medidas para reducir los costos de producción y lograr un *shock* de oferta: bajar el costo salarial, las tarifas de servicios públicos y las tasas de interés. Con ello, creía posible solucionar los problemas de los exportadores y las empresas que competían en inferioridad de condiciones con los productos importados (Cavallo 1999). Así, Cavallo pretendía generar cambios dentro de la Convertibilidad que mejoraran la rentabilidad empresarial.

Finalmente, la Alianza ganó las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999. La fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo 48,4% de los votos, contra 38,3% de Duhalde-Ortega y 10,2% de Cavallo-Caro Figueroa (MI-SAPE 2008). Este resultado significó el triunfo de la fuerza que expresaba más cabalmente la continuidad de las políticas neoliberales. Esto mostraba la fortaleza que la hegemonía neoliberal aún conservaba entre los votantes, pese a los efectos sociales negativos de las transformaciones sociales de los noventa y a la pérdida de consenso del menemismo en su segundo mandato (Bonnet 2008).

b. El Gobierno de la Alianza y la política de ajuste fiscal

Desde su asunción el 10 de diciembre de 1999, la Alianza continuó con la política del PJ, manteniendo las reformas neoliberales de los noventa. Asimismo, asumió la vía ortodoxa de gestión de la crisis: mantener controladas las cuentas fiscales para garantizar el financiamiento externo al país y el pago de la deuda pública. Para ello, los cursos de acción posibles eran la baja del gasto público, el aumento de los recursos tributarios o la venta de los escasos activos estatales. La política fiscalista de la Alianza le impidió cumplir con promesas electorales de corte heterodoxo para lograr la reactivación económica, como la implementación de planes de infraestructura y de construcción de viviendas.

Sin duda, la opción por la continuidad de la política neoliberal de gestión de la crisis estaba fuertemente condicionada por la delicada situación fiscal y financiera del Estado, que era resultado de los desequilibrios acumulados bajo la Convertibilidad. La eliminación o reducción de impuestos y la privatización de los fondos de pensión de los trabajadores habían desfinanciado al Estado, que había perdido importantes recursos tributarios (Gaggero y Gómez Sabaini 2002). Asimismo, la deuda pública había crecido durante los noventa hasta constituir el principal componente del déficit fiscal (Lozano y Schorr 2001). Este endeudamiento era necesario para cubrir los vencimientos

de la deuda pública, sostener el tipo de cambio fijo y cubrir el déficit primario. Al asumir la Alianza, el Estado estaba en una situación de virtual quiebra, con dificultades de acceso al crédito por el reflujo del capital financiero hacia los países centrales (*flight to quality*, en el lenguaje financiero). Esto limitaba la disponibilidad de recursos para políticas de reactivación económica, condicionando las estrategias del Gobierno.

Sin mayores activos para privatizar, el Gobierno de la Alianza apeló a la mayor presión tributaria y la reducción del gasto público. En diciembre de 1999, el ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció un recorte de gastos del Estado nacional por \$1.400 millones, junto a un aumento y extensión de impuestos a las ganancias y al consumo. Así, el Gobierno esperaba obtener recursos por \$2.900 millones, entre ahorro y recaudación. El recorte recaía sobre el PAMI (la obra social de los jubilados), las jubilaciones mayores a \$3.100, los subsidios para desocupados y los regímenes de promoción industrial de algunas provincias, mientras que el aumento de impuestos afectaba a los trabajadores asalariados y autónomos (Salvia 2011). Para Machinea, el objetivo era cumplir con las metas de déficit acordadas con el FMI, una condición para continuar recibiendo asistencia financiera (Nemiña 2012). Este ajuste inicial no encontró resistencias en los dirigentes de la Alianza, por cuanto permitía iniciar el Gobierno con un mínimo de previsibilidad financiera.

En mayo de 2000, el Gobierno decidió un nuevo ajuste buscando reducir el riesgo soberano —en alza desde abril— y asegurar el apoyo financiero del FMI. El 29 de mayo, De la Rúa decretó un ajuste de \$938 millones y la asignación de \$300 millones a planes sociales, lo que dejaba un ahorro de \$638 millones (Salvia 2011). El principal componente era el recorte del 12% de los salarios de entre \$1.000 y \$6.500, y del 15% de los salarios mayores a \$6.500 (BO 2000a). Asimismo, se disponía un aumento de la alícuota del 9% al 25% en el anticipo del Impuesto a las Ganancias, que se debía pagar en junio (BO 2000b). La combinación de menor gasto corriente y mayor recaudación permitió al Gobierno cumplir con la meta de déficit acordada con el FMI.

La política de ajustes como respuesta única ante la crisis tenía un impacto negativo en la legitimidad de la Alianza, por cuanto afectaba directamente su base electoral, con fuerte peso de “sectores medios” y asalariados (Piva 2013). Estos ajustes estaban en el centro de la pérdida de legitimidad política de la Alianza,

ya que dificultaban la posibilidad de presentar la política del Gobierno como la realización de un interés general de la sociedad. Asimismo, profundizaban la tendencia al alza de la conflictividad social iniciada en 1999.

c. El crecimiento de la conflictividad social ante la crisis económica

Las reformas neoliberales de los noventa generaron diversas formas de protesta social. La primera mitad de la década se caracterizó por una alta conflictividad sindical (Piva 2009), que incluyó varias huelgas generales convocadas por las diferentes centrales obreras, que mostraron un alto grado de unificación y de alianzas con otras fracciones sociales (Iñigo Carrera y Cotarelo 2003). Los trabajadores del sector público, directamente afectados por las privatizaciones, encabezaron las protestas. Entre 1996-1998, se dio una baja en la cantidad de conflictos, en particular sindicales (Schuster *et al.* 2006). En esos años comenzaban a emerger un sujeto y un tipo de organización que serían centrales en el Gobierno de la Alianza: el trabajador desocupado y la organización piquetera (Klachko 2007). Las primeras organizaciones de desocupados se nutrían de extrabajadores de la petrolera YPF, desvinculados con su privatización mediante despidos o retiros voluntarios, que demandaban puestos de trabajo con la solidaridad de otras fracciones sociales (Piva 2009).

Estas transformaciones de la protesta social tienen que ver con los cambios que se venían desarrollando en la estructura social argentina. Como sostienen Donaire y Rosatti (2010), estos cambios se caracterizaban por la aceleración de la tecnificación del agro y el descenso del peso de los asalariados industriales, particularmente importantes en los partidos del conurbano bonaerense, asiento principal de la clase obrera. Ambas tendencias generaban una expansión de la sobrepoblación relativa, expresada en forma encubierta en el empleo estatal —en especial, en el Noroeste y la Patagonia— o en forma abierta en la desocupación —en particular, en el centro político y económico del país, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba—.

El Gobierno de la Alianza se situaba en un nuevo ciclo ascendente de la protesta social, en el que la conflictividad sindical volvía a crecer y donde lo distintivo era el ascenso de la lucha de las organizaciones piqueteras, en especial en 2000-2001 (Schuster *et al.* 2006; Piva 2009). La Alianza fue incapaz de contener este ascenso de la lucha social, pese a las estrategias represivas y

concesivas desplegadas. La asunción de la Alianza estuvo marcada por el corte del puente General Belgrano en la ciudad de Corrientes y su defensa mediante barricadas durante ocho días. Esta medida escalaba la intensidad de un conflicto desarrollado desde marzo de 1999, iniciado por el reclamo de salarios docentes adeudados y que finalizó exigiendo la renuncia del Gobernador. El corte finalizó con el desalojo del puente por la Gendarmería nacional, lo que costó la vida a dos manifestantes (Klachko 2007). La respuesta represiva del Gobierno se enmarcaba en una política de no reconocimiento de las demandas de las organizaciones gremiales, caracterizada por diversas formas de represión y sanción, y por la insistencia en medidas rechazadas por estas organizaciones (Gómez 2009). La reforma laboral aliancista, un elemento destacado de esta política, contribuyó a activar la lucha sindical. La resistencia a esta reforma fue encabezada por el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), conducido por Hugo Moyano, que aglutinó también a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la cual agrupaba fundamentalmente a trabajadores del sector público y se identificaba políticamente con el Frepaso. Esta resistencia incluyó la ruptura formal del MTA con la CGT y la convocatoria a una huelga general del MTA y la CTA contra la reforma (Merino 2012).²

En paralelo a la resistencia de los sindicatos más combativos, continuó el ascenso de la lucha de los trabajadores desocupados, que se iban constituyendo en un movimiento social, con organizaciones y dirigentes estables que perduraban más allá de los conflictos puntuales (Klachko 2007). El movimiento piquetero se caracterizaba por el corte de rutas como forma de acción, y la asamblea como forma de decisión. El corte de 6 días de la ruta 3 en La Matanza, en octubre-noviembre de 2000, mostró la solidez de este movimiento. Este corte fue organizado por la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) —ligada a la CTA— y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), las dos mayores organizaciones de trabajadores desocupados. Contó con aproximadamente 3.000 piqueteros en la ruta y fue

2 En tanto, la CGT, que era la principal central sindical, tuvo una oposición más moderada que continuaba su estrategia de negociación desarrollada ante las leyes de flexibilización de los noventa, buscando evitar sus efectos más destructivos sobre las organizaciones gremiales, como la rebaja nominal de salarios y la desregulación de las obras sociales sindicales (Merino 2012; Salvia y Frydman 2004).

levantado tras el compromiso de los gobiernos nacional y provincial de entregar a las organizaciones unos 9.500 planes sociales, entre otras demandas (Klachko 2007). En adelante, la entrega de planes sociales a las organizaciones piqueteras contribuyó a robustecer la lucha de estas mismas organizaciones. Esto sería fundamental en el crecimiento de la protesta de los trabajadores desocupados y en el fortalecimiento de las organizaciones piqueteras en 2001.

d. La flexibilización laboral y la corrupción como políticas de gobierno

Junto a la política económica fiscalista de la Alianza y al ascenso de la protesta social, existió otro proceso determinante en la desestructuración interna de la Alianza y en la acelerada pérdida de legitimidad que generó desde el poder político: la continuidad de la flexibilización laboral y las sospechas de corrupción que se cernieron sobre el Gobierno y la oposición peronista. En línea con el carácter neoliberal de su política, la única iniciativa para detener el deterioro de la economía real fue incrementar la “flexibilización laboral” —un eufemismo para designar la precarización de los contratos de trabajo (Marticorena 2014)— buscando recuperar la rentabilidad empresarial con la reducción del costo salarial.

La reforma laboral de la Alianza, que era una de las condiciones del acuerdo con el FMI (Nemíña 2012), fue enviada al Congreso en enero de 2000, con el impulso del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. La reforma buscaba atacar la fortaleza sindical en las negociaciones laborales, posibilitando la negociación a la baja, necesaria para reducir los costos laborales de las empresas. Las asociaciones empresariales mostraron un cerrado apoyo a la iniciativa, con una activa defensa de la UIA y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en el Congreso. Como vimos en la sección anterior, los sindicatos se mostraron en desacuerdo con la reforma, en particular el MTA y la CTA, mientras que la CGT se opuso, pero desde una posición más conciliadora. Asimismo, la reforma laboral contaba con la resistencia a su aprobación por parte del bloque mayoritario de la Cámara de Senadores, correspondiente al PJ. La reforma laboral fue aprobada el 26 mayo de 2000, luego de un acuerdo del Gobierno con la CGT para realizarle modificaciones, pese al rechazo de un grupo de nueve legisladores de la Alianza (*La Nación* 2000). La Ley 25.250 de Empleo Estable habilitaba el contrato a prueba por un período de tres a seis meses al inicio de la relación laboral, daba prevalencia a la negociación laboral por empresa respecto a la rama de actividad y eliminaba la

“ultraactividad” (vigencia permanente) de los Convenios Colectivos de Trabajo, pero después de un período de dos años (BO 2000c).

La aprobación de una nueva ley de flexibilización mostró la supervivencia de aquellas prácticas que habían sido más cuestionadas por la Alianza al gobierno menemista, cuya centralidad había ido en aumento con el progresivo abandono de las críticas a las reformas neoliberales. La reforma laboral quedó enmarcada en un manto de sospechas por el cambio de posición de un grupo de senadores del PJ, con denuncias de pago de sobornos del Gobierno a los mismos —e incluso a senadores de la UCR— (Peralta Ramos 2007). Así, se convirtió en un caso testigo de la continuidad de formas de corrupción extendidas bajo el menemismo. Estas sospechas de corrupción jaquearon al Gobierno, siendo uno de los elementos fundamentales de la desintegración de la Alianza.

e. El descontento interno y el inicio de la disgregación de la Alianza

Las políticas de ajuste ortodoxo como única respuesta al deterioro económico y las prácticas de corrupción en el seno del Gobierno tensionaron internamente la Alianza, a partir del descontento de dirigentes del Frepaso y de la UCR. Tras el ajuste de mayo de 2000, aparecieron voces críticas de la política económica, como la del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y la del expresidente Raúl Alfonsín, que criticaron el papel del FMI en los países de la región, cuyos programas veían como un fracaso (Peralta Ramos 2007). Asimismo, “Chacho” Álvarez, Graciela Fernández Meijide y el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, llamaron la atención sobre la necesidad de atacar la recesión económica con medidas específicas, complementando los ajustes realizados (Salvia 2012). Asimismo, varios legisladores aliancistas objetaron el proyecto de Presupuesto 2001. Las internas de la Alianza sembraban dudas entre los inversores externos sobre la capacidad de imponer los ajustes en el Congreso, como quedó claro en la Asamblea anual del FMI, que contó con la participación del ministro de Economía, José Luis Machinea.

Paralelamente, la tensión interna crecía por el aval del vicepresidente Álvarez a las denuncias sobre sobornos a senadores en la aprobación de la reforma laboral. En tanto el Frepaso había centrado su discurso en la lucha contra la corrupción, “Chacho” Álvarez tenía escaso margen para ignorar los rumores de pago de sobornos en la Cámara de Senadores que él mismo presidía. Estos rumores, publicados por los medios de comunicación en agosto, desataron un

escándalo que quedó en el centro de la escena política. El vicepresidente Álvarez realizó la denuncia judicial e impulsó la investigación, en abierta oposición al presidente De la Rúa, que desacreditaba las versiones (Dikenstein y Gené 2014). El escándalo incluía como actores centrales al ministro Flamarique y al secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, de extrema confianza del Presidente.

Ante este doble cuadro de cuestionamientos internos, De la Rúa buscó reforzar su autoridad con una renovación del Gabinete, el 5 de octubre de 2000. Los dos principales involucrados en el presunto pago de coimas en el Senado fueron premiados: Alberto Flamarique fue ascendido a la Secretaría General de la Presidencia, mientras que Fernando de Santibáñez fue ratificado en su cargo (Peralta Ramos 2007). Esto era un abierto desafío al activo rol denunciante del vicepresidente Álvarez. Asimismo, debieron renunciar los ministros más cercanos al alfonsinismo y más críticos de la gestión económica, como Rodolfo Terragno (jefe de Gabinete), Nicolás Gallo (Infraestructura) y Ricardo Gil Lavedra (Justicia), que fueron reemplazados por hombres de confianza de De la Rúa (Dikenstein y Gené 2014). Sin mayor margen dentro del Gobierno, el vicepresidente Álvarez presentó la renuncia, el 6 de octubre de 2000. La inmediata renuncia de Flamarique no pudo torcer la decisión y surgieron rumores sobre una ruptura de la Alianza (Peralta Ramos 2007). De esta manera, la reforma laboral inició la disgregación interna de la Alianza y tuvo un efecto destructivo en su legitimidad, por el contraste entre las expectativas de eliminación de la corrupción y la realidad del ejercicio del Gobierno. Esta situación generaba además una escisión en el bloque legislativo de la Alianza, con la salida de un grupo de diputados díscolos que formaron su propio partido, al que denominaron Alternativa por una República de Iguales (ARI).

2. La caída de la Alianza: ajuste ortodoxo, derrota electoral y rebelión popular

La renuncia del vicepresidente Álvarez fue un hito en la crisis política argentina. A partir de allí, se agravaron las dificultades internas de la Alianza, que ingresó en un camino de disgregación, mostrando el fracaso de una fuerza política de tan sólo tres años de vida, que había logrado un considerable apoyo de la ciudadanía. Paralelamente, desde esta renuncia la situación financiera se fue tornando más delicada, la política de ajustes se fue volviendo más extrema y la recesión se fue agravando.

En este movimiento de deterioro, la deslegitimación de la Alianza y el crecimiento de la lucha social condujeron a su estridente caída, con una dura derrota en las elecciones legislativas, en octubre de 2001, en medio de una impugnación ciudadana al sistema político, y con la incapacidad de contener la escalada de acciones de protestas en el mes de diciembre, en una situación de depresión económica y bancarrota financiera.

a. La profundización de la crisis económica y la política de ajuste

Los conflictos de la Alianza deterioraban las perspectivas de la economía argentina, ante la previsible debilidad para sostener la política de austeridad fiscal, que era condición para la asistencia financiera del FMI. Tras la renuncia del vicepresidente Álvarez, la situación financiera se agravó sensiblemente: el riesgo país creció aceleradamente, llevando a un cierre de los mercados voluntarios de deuda y a un fuerte aumento de las tasas de interés, que conducía a una profundización de la recesión y al *default* de la deuda pública (BCRA 2001a). En este contexto, el FMI decidió otorgar una asistencia extraordinaria al país, que cobró forma en el “Acuerdo de respaldo financiero”, más conocido como el Blindaje. Consistía en un paquete de créditos de US\$39.700 millones, que fue aprobado por el Directorio del FMI el 20 de diciembre de 2000. Al día siguiente se realizó el primer desembolso, por US\$2.100 millones. Estos créditos fueron otorgados por el FMI, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España, con una tasa promedio de 8%. Además, incluía una refinanciación de deudas con bancos locales (FMI 2001; BCRA 2001a; BCRA 2001b). El Blindaje no logró quebrar el movimiento descendente de la economía. En el primer trimestre de 2001, el PIB cayó un 2%, y la recaudación se redujo en un 3,1% (datos de INDEC). El déficit fiscal siguió fuera de control, con un crecimiento de 48% en el primer trimestre de 2001 respecto a igual trimestre de 2000, excediendo lo acordado con el FMI (ONP 2014a). Este cuadro llevó a la renuncia de Machinea al Ministerio de Economía, a principios de marzo.

De esta manera, a pocos meses del Blindaje, la crisis financiera volvía a estar en el centro de la escena política. Ante esto, la Alianza llevó a cabo una política oscilante, en la que lo fundamental fueron las políticas de ajuste del gasto público: en el mes de marzo, intentó implementar un ajuste del gasto primario, que fracasó rotundamente y tuvo importantes consecuencias en términos

políticos; en el mes de julio, realizó un novedoso ajuste que logró llevar el déficit primario a cero, que empujó la economía a la depresión. Entre estos dos ajustes, la Alianza llevó a cabo un programa heterodoxo de subsidio a la producción de bienes, demostrando que definía su política en un proceso de ensayo y error.

El ajuste de marzo de 2001 fue impulsado por Ricardo López Murphy, que pasó de la cartera de Defensa a la de Economía. Consistía en un recorte del gasto público por \$1.962 millones para 2001, que afectaba los salarios docentes de educación primaria, los fondos de la educación superior, por \$361 millones, y las transferencias a las provincias, por \$968 millones; además, eliminaba exenciones impositivas (actividades culturales, cooperativas, fundaciones) y subsidios (fondos provinciales, asignaciones familiares y pensiones). Junto a este recorte, el Gobierno enviaba al Congreso proyectos de ley para privatizar el Banco Nación, Lotería Nacional y Casa de la Moneda, despedir a 40.000 estatales y profundizar la flexibilización laboral (Salvia 2011). Los efectos políticos de este ajuste fueron significativos, con la desertión de los dirigentes del Frepaso y los pocos dirigentes alfonsinistas que quedaban en el Gobierno. En rechazo al ajuste, renunciaron los frepasistas Graciela Fernández Mejjide (vicejefa de Gabinete), Ricardo Mitre (secretario general de la Presidencia), Marcos Makón (ministro de Desarrollo Social) y Nilda Garré (secretaria de Interior). También renunciaron los ministros radicales Federico Storani (Interior) y Hugo Juri (Salud), y Raúl Alfonsín se pronunció contra el ajuste. En el Congreso, los legisladores de la Alianza se opusieron al ajuste, y los del PJ se negaron a votarlo, a partir del rechazo de los gobernadores de esta fuerza (Peralta Ramos 2007). Esta falta de apoyo político evidenció las dificultades para construir consenso en torno al ajuste, en un año de elecciones legislativas. La resistencia dentro de la Alianza y la gran cantidad de acciones de protesta de los afectados por el ajuste enterraron el plan de López Murphy y forzaron su renuncia.

El ajuste de julio de 2001 fue impulsado por Domingo Cavallo, que reemplazó a López Murphy. Este ajuste fue resultado del fracaso del programa heterodoxo inicial de Cavallo.³ En vez de lograr algún efecto de reactivación

3 Este programa heterodoxo incluyó la reducción de los aranceles de importación extrazona para bienes de capital y su aumento para bienes de consumo; exenciones y rebajas impositivas para la industria, el agro y la construcción, que fueron el corazón de los Planes de

económica, este programa profundizó la volatilidad financiera: en solo un mes, el riesgo país escaló 700 puntos básicos (p. b.), llegando a 1600 p. b. a mediados de julio (datos de Ámbito Financiero, AF). Este nivel era muy superior al que había llevado al Blindaje. En este contexto, el FMI endureció su posición hacia Argentina, congelando el Blindaje (Nemiña 2012). Ante ello, Cavallo retomó la política de ajuste, en una escala inédita: impulsó la reducción del gasto primario del Estado —salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, insumos, inversión— en la proporción necesaria para cubrir el pago de deuda pública con recursos propios, mediante la Ley de Equilibrio Fiscal, más conocida como la Ley de Déficit Cero (BO 2001). Siguiendo esta Ley, el Gobierno decretó un recorte del 13% en los salarios estatales, jubilaciones y pensiones. El Déficit Cero pudo ser aprobado gracias a un acuerdo con los gobernadores del PJ para facilitar el quórum y ausentar a una parte de sus legisladores, y a que el Gobierno logró neutralizar el rechazo de algunos legisladores de la Alianza (Peralta Ramos 2007). Así, en la Cámara de Diputados se ausentaron más legisladores que los que votaron a favor, permitiendo la aprobación de la norma con solo un tercio de los diputados.

La Ley de Déficit Cero tuvo un moderado efecto financiero, con una baja del riesgo país hasta los 1400 p. b. En septiembre, el riesgo país volvió a escalar, llegando a 1800 p. b. al inicio de octubre (datos de AF). Pero el efecto más importante fue sobre la economía real: el PIB cayó 4,9% en el tercer trimestre de 2001; para el mes de octubre, la caída de la actividad económica llegaba al 7,6% (datos de INDEC). Así, las políticas ortodoxas mostraban su fracaso: los ajustes eran tanto ineficaces para encauzar la situación financiera como destructivos para la economía real. Las consecuencias sociales eran devastadoras: la desocupación creció en más de 470 mil personas entre octubre de 1999 y octubre de 2001, llegando a un récord de 18,3% de la PEA, la segunda mayor tasa de la historia. Del mismo modo, la pobreza llegó al 38,3% de la población en octubre de 2001 (datos de INDEC).

En paralelo al fracaso económico, las políticas neoliberales erosionaban la legitimidad política de la Alianza y generaban diversas respuestas de los afectados por estas políticas, e incrementaron la protesta social.

Competitividad; y un “factor de convergencia” para el comercio exterior que mejoraba el tipo de cambio real (Salvia 2011).

b. El alza de la conflictividad social como desafío al Gobierno

La continuidad de las políticas neoliberales contribuyó al crecimiento de la conflictividad social. Durante 2001 crecieron los conflictos protagonizados por las organizaciones sindicales, y muy especialmente por organizaciones de trabajadores desocupados. Asimismo, tuvieron un rol destacado en la conflictividad los estudiantes y los pequeños propietarios (Piva 2009). Este crecimiento de la conflictividad fue paralelo al desarrollo de un nuevo formato de protesta, que incluía el corte (de rutas, calles, vías), el cacerolazo, el escrache, la olla popular, etcétera. Estas modalidades de protesta se combinaban con demandas que impugnaban el modelo económico o que reclamaban asistencia social y puestos de trabajo (Schuster *et al.* 2006). Detrás de ello se encontraban los ajustes fiscales y el deterioro económico, aunque también la voluntad del Gobierno de negociar con las organizaciones piqueteras la entrega de planes sociales, a fin de saltar a los punteros territoriales del PJ (Klachko 2007).

En marzo de 2001, el ajuste del ministro López Murphy constituyó un momento central en la conflictividad social. Como vimos, este ajuste fracasó ante la negativa de las bancadas de la Alianza y el PJ de votarlo en el Congreso. Pero este bloqueo legislativo estaba influido por la resistencia social al ajuste, con una gran cantidad de acciones de protesta protagonizadas por los trabajadores estatales, del sector privado y estudiantes. El rechazo al ajuste incluía al conjunto de las organizaciones sindicales: los sindicatos peronistas de la CGT y el MTA, la centroizquierdista CTA y la más pequeña CCC, de izquierda. Estas acciones incluyeron la convocatoria a un paro general de veinticuatro horas del MTA y la CTA, un paro de cuarenta y ocho horas de los sindicatos docentes, un paro por tiempo indeterminado de los sindicatos de profesores universitarios (afiliados a la CTA), la convocatoria a un nuevo paro por el MTA, la CTA y la CCC, y una masiva marcha a la Plaza de Mayo organizada por las distintos sectores en lucha, a la que adhirió la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME), una tradicional asociación de pequeños propietarios (Piva 2013). Se produjeron más de cien tomas de facultades en todo el país, en un movimiento estudiantil que desbordó las federaciones estudiantiles, dirigidas por la juventud radical (Iñigo Carrera y Cotarelo 2003). Además, a las protestas se sumaron las organizaciones piqueteras, que realizaron cortes en varios puntos del Gran Buenos Aires, los más importantes en el puente Pueyrredón y La Matanza (Klachko 2007).

La asunción de Cavallo como ministro y sus planes heterodoxos iniciales generaron un momentáneo reflujo de la movilización popular, que se extendió hasta julio, cuando se inició otra oleada de protesta social contra Déficit Cero (Bonnet 2008). El envío al Congreso de este ajuste generó la inmediata reacción de los gremios estatales centrados alrededor de la CTA, que convocaron a una huelga y a una movilización en la Plaza de Mayo, que fue masiva, y la CGT, el MTA y la CTA convocaron a un paro general sin movilización (Piva 2013). Pero el cambio cualitativo en la resistencia social al ajuste estuvo en la decisiva participación del movimiento piquetero. Las organizaciones de desocupados de diferentes lineamientos ideológicos, como la FTV, la CCC, el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Movimiento Teresa Rodríguez, se unieron en el primer congreso piquetero nacional (la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados), con la participación de más de dos mil delegados, al que concurrieron la CTA y el MTA (Pucciarelli 2014). Este conjunto de organizaciones llevó a cabo masivos cortes de ruta y de calles a fines de julio y principios de agosto, en los que participaron más de 120 mil manifestantes, con tres demandas generales unidas a una diversidad de reclamos específicos: derogación del ajuste, preservación de los planes sociales y libertad a los presos por luchas sociales (Pucciarelli 2014). Se produjeron cortes importantes en Salta y Jujuy, pero el centro de gravedad estuvo puesto en los cortes masivos de La Matanza y en una multiplicidad de cortes en la zona sur del Gran Buenos Aires y La Plata (Piva 2013). Esta resistencia tuvo el apoyo de la totalidad de partidos de izquierda y de fuerzas de centro-izquierda, como el ARI y el Polo Social, nutridos de dirigentes que habían abandonado la Alianza (Pucciarelli 2014).

Aunque el ajuste no pudo ser anulado, las protestas mostraron un alto grado de articulación social, ya que unificaron los movimientos de desocupados entre sí y con organizaciones de otras fracciones sociales, como los sindicatos, el movimiento estudiantil, asociaciones de pequeños propietarios, como la Federación Agraria Argentina (FAA), y partidos políticos, que apoyaron las medidas (Klachko 2007). La resistencia social se replegó de las calles desde mediados de agosto, expresándose en el terreno electoral en la derrota del Gobierno y el rechazo al mecanismo del voto, en octubre de 2001, así como en la explosión de la conflictividad, en diciembre de 2001. Estos procesos provocaron el colapso final de la Alianza, en un contexto de bancarrota financiera y depresión económica.

c. El rechazo a los partidos políticos y la debacle electoral de la Alianza

Las elecciones del 14 de octubre de 2001 mostraron la pérdida de consenso social de la Alianza, particularmente importante en los sectores medios y en los trabajadores de las grandes ciudades, que habían sido su principal base electoral en las presidenciales de 1999; pero este proceso electoral es complejo. Como afirma Bonnet (2008) el deterioro de la legitimidad afectó al conjunto del sistema político, de manera que la derrota de la Alianza no se tradujo en un ascenso del PJ. La razón de ello estriba en que la corrupción, el deterioro de la situación social y las políticas de ajuste fiscal no eran patrimonio exclusivo de la Alianza, sino que eran la continuación de la historia reciente del PJ en el Gobierno. Junto a ello, el PJ había colaborado con la Alianza en el Congreso para la aprobación del Déficit Cero, la reforma laboral sospechada de pago de sobornos y otros proyectos enviados por la Alianza. Más que un triunfo del PJ, los resultados de la elección mostraron el rechazo de una parte importante de la ciudadanía a una dirigencia política que era vista como responsable de una crisis que afectaba o amenazaba sus condiciones de vida. Un rechazo que combinaba elementos de crítica moral a una “clase política” intrínsecamente corrupta y elementos de impugnación a la propia institucionalidad democrática —como la negativa misma al recambio electoral de dirigentes como vía de solución de los problemas— (Bonnet 2008).

El principal emergente de la elección fue el rechazo a los partidos políticos, expresado en la extraordinaria cantidad de votos en blanco y anulados, que en los medios de comunicación recibió la denominación “voto bronca” (Vilas 2006). Este voto negativo alcanzó el 24% del total de votos emitidos (DNE 2014a), convirtiéndose en la segunda fuerza a nivel nacional, con un notable crecimiento desde el 4,5% de 1999 (MI-SAPE 2008). Contando el voto negativo, el PJ obtuvo el 26,7%, quedando la Alianza en tercer lugar, con el 16,9% (DNE 2014a). En esta ola de repudio ciudadano, la Alianza fue la principal perdedora, cediendo más de 4,8 millones de votos a Diputados nacionales respecto a las elecciones de 1999, es decir, más del 60% de su caudal electoral (Cheresky 2003). El partido de Domingo Cavallo (AR), que había sido la tercera fuerza en 1999, fue el otro gran perdedor: en los nueve distritos en los que presentó listas propias perdió más de 700 mil votos, un 82,4% de los obtenidos en 1999, y tuvo que subsumirse en las listas del PJ en Capital Federal, Córdoba y Santiago del Estero, quedando fuera

de competencia en Corrientes.⁴ El PJ los siguió en la pérdida de apoyo electoral: si bien ganó en la mayoría de los distritos, lo hizo perdiendo más de 1,7 millón de votos (más del 26% de los votos de 1999), contabilizando los frentes electorales en ambas elecciones (DNE 2014a; DNE 2014b).

Como afirma Cheresky (2003), la pérdida de votos de la Alianza y el PJ no solo nutrió el voto bronca, sino también a las fuerzas de izquierda y centro-izquierda. Las fuerzas de centro-izquierda (ARI y Polo Social) se convirtieron en la cuarta fuerza nacional (tras el PJ, el voto bronca y la Alianza), con más de 1,6 millón de votos, y las fuerzas de izquierda reunieron entre varias listas casi 1,5 millón de votos, un caudal de votos originado en la desafección de los exvotantes del Frepaso (Torre 2003). De este modo, las únicas fuerzas que se fortalecieron en las elecciones, logrando un importante caudal de votos, fueron las fuerzas de izquierda y centro-izquierda, es decir, aquellas que se oponían a las políticas neoliberales que desarrollaba la Alianza en colaboración con el PJ. Estas fuerzas de izquierda y centro-izquierda eran las mismas que denunciaban la corrupción en el Gobierno de la Alianza y que habían participado en las diversas formas de protesta social o adherido a ellas —algunas estaban directamente vinculadas a organizaciones de desocupados—.

A continuación, analizamos los resultados electorales por distrito, a partir de la información de la tabla 1, construida con datos del escrutinio definitivo para Diputados nacionales de las elecciones de 1999 y 2001 (DNE 2014a; DNE 2014b). Esto nos permitirá observar la pérdida de capital político de la Alianza, la *performance* del PJ y la magnitud del voto negativo en cada distrito.

En 2001, la Alianza perdió en los primeros seis distritos electorales, que concentraban el 70,3% de los votos emitidos, una derrota significativa, dado que en 1999 había ganado en todos ellos. En dos distritos, la Alianza cedió el primer lugar al voto negativo (Capital Federal y Santa Fe), y en cuatro, al PJ (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos). En estos seis distritos, la Alianza perdió más

4 Cabe señalar que la bibliografía ha indicado que la pérdida de votos de AR alcanzó los 1,2 millones, una cifra que se obtiene sin restar de los votos de 1999 los correspondientes a Capital Federal, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes, donde AR no presentó listas en 2001, lo que sobrestima la pérdida absoluta de votos. Véase, entre otros, Escolar, Calvo, Calcagno y Minvielle (2002).

Tabla 1. Porcentaje de votos sobre el total de emitidos.
 Elecciones para diputados nacionales 1999 y 2001

Distrito	Alianza 1999		Alianza 2001		Diferencia Alianza 2001-1999		Negativo 2001 (blanco + anulados)		PJ 2001	
	Votos	%	Votos	%	Votos	%	Votos	%	Votos	%
Buenos Aires	3.080.133	40,1	814.551	11,4	-2.265.582	-73,6	1.850.573	25,9	1.982.054	27,7
Capital Federal	1.027.574	50,0	260.475	13,8	-767.099	-74,7	551.380	29,2	156.104	8,3
Santa Fe	576.191	32,9	263.998	15,5	-312.193	-54,2	712.902	41,8	343.461	20,1
Córdoba	757.426	43,4	326.105	19,7	-431.321	-56,9	362.850	21,9	352.045	21,2
Mendoza	302.244	35,5	133.259	16,3	-168.985	-55,9	164.322	20,2	187.502	23,0
Entre Ríos	313.930	46,7	137.098	21,7	-176.832	-56,3	134.558	21,3	228.909	36,2
Chaco	255.096	54,9	210.451	44,8	-44.645	-17,5	34.237	7,3	151.194	32,2
Salta	200.697	43,0	36.943	8,0	-163.754	-81,6	81.577	17,7	202.782	44,0
S. del Estero	115.652	33,1	86.771	25,7	-28.881	-25,0	24.658	7,3	169.418	50,2
San Juan	159.254	51,9	77.966	25,6	-81.288	-51,0	74.589	24,5	88.943	29,2
Jujuy	116.369	49,3	77.761	29,4	-38.608	-33,2	63.734	24,1	74.127	28,0
Río Negro	124.401	46,3	65.037	25,6	-59.364	-47,7	72.603	28,6	48.113	18,9
Chubut	105.017	51,5	57.674	28,9	-47.343	-45,1	52.090	26,1	42.683	21,4
San Luis	73.276	39,9	24.909	14,0	-48.367	-66,0	6.857	3,9	115.716	65,0
Catamarca	69.097	42,4	69.769	42,9	672	1,0	13.879	8,5	53.069	32,6
Santa Cruz	37.561	40,9	23.276	24,8	-14.285	-38,0	9.998	10,6	47.325	50,4
Tucumán	184.190	32,7	67.757	11,6	-116.433	-63,2	91.840	15,7	177.524	30,3
Misiones	189.937	44,3	149.502	35,5	-40.435	-21,3	52.366	12,4	163.098	38,7
Corrientes	106.968	24,2	152.147	37,4	45.179	42,2	9.930	2,4	174.089	42,8
Formosa	91.791	45,2	57.614	28,2	-34.177	-37,2	17.567	8,6	84.114	41,2
La Pampa	79.260	43,5	30.609	17,7	-48.651	-61,4	28.898	16,7	71.962	41,6
La Rioja	38.860	28,6	15.252	10,4	-23.608	-60,8	26.152	17,9	68.657	46,9
Neuquén	74.671	32,7	27.190	11,6	-47.481	-63,6	57.661	24,7	36.551	15,7
T. del Fuego	10.112	22,9	5.018	10,4	-5.094	-50,4	13.662	28,3	8.455	17,5

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Escrutinio definitivo de las elecciones generales de 1999 y 2001.

de 4,1 millones de votos, el 68% de los obtenidos en 1999. El PJ no tuvo un gran desempeño en estos seis distritos, perdiendo más de 1,6 millón de votos (33,5%). Santa Fe mostró la mayor proporción de voto negativo (41,8% de los votos emitidos), un distrito con una fuerte pérdida de votos para la Alianza (70,3%) y el PJ (36,4%) respecto a 1999. En la Capital Federal se registró la segunda mayor pérdida relativa de votos de la Alianza (el 74,7%) respecto a 1999: la Alianza perdió casi 220 mil votos más que el voto negativo, lo cual indica una transferencia de votos a terceras fuerzas. Tanto en Capital Federal como en Santa Fe, el voto negativo fue más del doble que la segunda fuerza (la Alianza y el PJ, respectivamente). En Buenos Aires, primer distrito electoral, se dio la mayor pérdida absoluta de votos de la Alianza: más de 2,2 millones de los votos emitidos; así, la Alianza quedó relegada al tercer lugar, detrás de un debilitado PJ, que perdió más de 600 mil votos (24,1% de los votos de 1999), y del voto negativo.

En los otros diez distritos en donde había triunfado en 1999, que agruparon el 13,8% de los votos emitidos, el desempeño de la Alianza no fue mucho mejor. En Río Negro triunfó el voto bronca, con el 28,6% de los votos, por el desplome de la Alianza, que perdió 47,7% de su caudal electoral de 1999. En Salta, San Juan y San Luis, la debacle de la Alianza fue muy importante, con caídas en su caudal electoral de 81,6%, 51% y 66%, respectivamente. Mientras que en San Juan esos votos se trasladaron mayormente al voto bronca, y el PJ triunfó por escaso margen, en Salta y San Luis se dirigieron al PJ, que logró importantes triunfos, con 44% y 65% de los votos, respectivamente. En Santiago del Estero y Santa Cruz, el voto bronca fue relativamente bajo, y la pérdida de votos de la Alianza nutrió al PJ, que ganó superando el 50% de los votos y duplicando los votos de la Alianza. Solo en cuatro distritos la Alianza mantuvo el triunfo: Chaco y Catamarca constituyeron sus únicos triunfos contundentes, en los que superó el 40% de los votos, con un voto negativo relativamente bajo (7,3% y 8,5%). En Jujuy y Chubut, la Alianza tuvo una importante pérdida de votos y se ubicó unos pocos puntos porcentuales por encima del voto bronca y el PJ.

Como era previsible, en los ocho distritos en los que había ocupado la segunda posición en 1999, el desempeño de la Alianza fue malo. En Tucumán, La Rioja, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego, la Alianza perdió más de la mitad de los votos respecto a 1999, obteniendo menos del 18%. El voto bronca fue primera fuerza en Tierra del Fuego y segunda fuerza en Neuquén, donde ganó

un partido provincial —el PJ fue tercero y la Alianza fue cuarta—. El PJ ganó con más de 40% de los votos en Misiones, Formosa y Corrientes. En este último distrito, la Alianza logró aumentar en un 42% su caudal electoral, una excepción en su tendencia al abismo.

En definitiva, los resultados de octubre de 2001 constituyeron la expresión electoral del rechazo a la dirigencia política, especialmente grave en el caso de la Alianza pero que afectó también al PJ, y de los que solo salieron fortalecidos los partidos más críticos. Cabe destacar que la pérdida de legitimidad de la Alianza es resultado de los problemas generados en el ejercicio del poder, como la corrupción, la reiteración del ajuste fiscal y el ascenso de la lucha social contra sus políticas. Esta pérdida de legitimidad se expresó electoralmente en octubre, y de manera explosiva en la rebelión popular de diciembre, en el momento de menor fortaleza del Gobierno y mayor gravedad de la crisis económica.

d. Debilidad política, debacle económica y rebelión popular

La delicada situación económica y política se hizo insostenible tras la derrota electoral de la Alianza. A la debilidad del Gobierno, se sumaba la designación de un peronista como presidente del Senado, quien era el primero en la línea sucesoria presidencial, lo que abría la posibilidad de un golpe institucional que destituyera al Presidente (Wainer 2010). En paralelo, la crisis económica se profundizaba: la caída de la actividad económica llegó al 8,7% interanual en noviembre (datos de INDEC), las reservas de divisas cayeron en US\$9.600 millones (38,9% del total) en los meses de octubre y noviembre (datos de BCRA) y retornó el déficit fiscal, por casi 700 millones de pesos en octubre (ONP 2014b). La debilidad política del Gobierno hacía inviable una nueva reducción de salarios y jubilaciones para volver a eliminar el déficit fiscal. En este contexto, a principios de noviembre de 2001, el FMI cortó el crédito internacional a Argentina (FMI 2004). Desde el primer día hábil de diciembre, el Gobierno restringió el retiro de los depósitos bancarios y la conversión de pesos a dólares, lo que se conoció como el “corralito” bancario. Junto a la incautación de los ahorros bancarios y la inconvertibilidad del peso, el corralito generó una desaparición del dinero como medio de cambio (Iñigo Carrera y Cotarelo 2006), dada la abrupta desmonetización de la economía (Piva 2009) y el pago de salarios estatales mediante bonos emitidos por los gobiernos provinciales, que se

había iniciado unos meses antes (Eskenazi 2009). El resultado fue un desplome de la actividad económica, con una caída del 15% en diciembre de 2001 (datos de INDEC). En esta situación, se potenció la protesta social, que estaba en un momento de reflujo desde mediados de agosto de 2001.

A continuación, reconstruimos los hechos siguiendo a Iñigo Carrera y Cotarelo (2006) y Piva (2013). Desde los primeros días de diciembre, se realizaron protestas espontáneas de ahorristas contra los bancos y el corralito. El 9 de diciembre, la CAME convocó para el día 12 a una movilización y a un apagón nocturno con cacerolazos y bocinazos, que fue importante por la participación de comerciantes en la Capital Federal; el mismo día, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires tomaron el Rectorado de dicha universidad. El 13 de diciembre, se realizó una huelga general convocada por la CGT, el MTA y la CTA, que tuvo una adhesión de entre el 60% y el 90%, en reclamo del fin del corralito bancario. En Córdoba, Rosario, La Plata y Neuquén hubo choques entre manifestantes y policías, escraches a bancos, supermercados y empresas privatizadas. Desde el día 14 se produjeron saqueos a supermercados en Rosario y Mendoza. El día 15, los saqueos se extendieron a Entre Ríos, y en Avellaneda los supermercados acordaron la entrega de alimentos a organizaciones de desocupados, para evitar saqueos. El día 16 continuaron los saqueos en Rosario, en varias ciudades de Mendoza y en Concordia (Entre Ríos); por su parte, los empresarios del transporte de cargas realizaron un *look out*, en reclamo de una baja del costo del combustible. El día 17 siguieron los saqueos en ciudades mendocinas (en Concordia) y hubo concentraciones que reclamaban alimentos en Quilmes y Avellaneda (Gran Buenos Aires); sindicatos ferroviarios realizaron un paro con piquetes, y obreros metalúrgicos cortaron un puente interprovincial; se produjeron cortes de calles y cacerolazos de comerciantes y vecinos en La Matanza (Gran Buenos Aires), Caballito, Boedo y Núñez, y cortes de ruta en Entre Ríos por productores agropecuarios de la FAA, transportistas y trabajadores estatales. El día 18 se produjo el primer saqueo en el Gran Buenos Aires, donde continuaban las manifestaciones frente a supermercados, al igual que en Santa Fe y Salta; trabajadores estatales de Santiago del Estero se movilizaron para reclamar el pago de sus salarios y se dio un cacerolazo con corte de calle y asamblea de comerciantes y vecinos en Capital Federal.

El día 19 las protestas se multiplicaron: se produjeron más de trescientos saqueos a comercios, supermercados y edificios públicos a lo largo de todo el

país, se realizaron cortes de rutas de productores agropecuarios y transportistas (Entre Ríos), trabajadores rurales (Tucumán), desocupados (Mendoza, Río Negro, Jujuy); la intendencia de una ciudad de Chaco fue tomada por desocupados, y en Córdoba se movilizaron trabajadores estatales, judiciales, colectivos y de la energía eléctrica, que se enfrentaron con la Policía durante cuatro horas. En Capital Federal se realizó una protesta de taxistas, y en La Plata la Policía reprimió una concentración frente a la Legislatura de estatales, trabajadores de la salud y docentes, quienes contestaron apedreando a los policías. Por la noche, el presidente De la Rúa decretó el estado de sitio y lo anunció por cadena nacional de radio y televisión. En rechazo al estado de sitio, se desató un masivo cacerolazo en la Capital Federal, que comenzó en los barrios y finalizó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Por último, durante todo el 20 de diciembre se produjeron combates callejeros entre los manifestantes y la Policía, que atacó con gases lacrimógenos y balas de goma, en la Plaza de Mayo y el centro porteño. Los manifestantes festejaron la renuncia del ministro Cavallo y reclamaron la renuncia del presidente De la Rúa, defendiéndose de la Policía mediante piedras y barricadas. Durante la jornada del 20, la Policía asesinó a manifestantes en el centro porteño y otros puntos del país, y el PJ rechazó un acuerdo de cogobierno con la UCR. Finalmente, De la Rúa renunció a la Presidencia de la Nación, ante la imposibilidad de contener la protesta social, pese a la vigencia del estado de sitio y ante su inmenso aislamiento político.

De esta manera, diferentes sujetos sociales confluyeron en la rebelión popular: ahorristas, productores agropecuarios, pequeños empresarios, estudiantes, comerciantes, trabajadores desocupados, trabajadores del sector público y del sector privado, se lanzaron a las calles en una diversidad de formas de protestas —saqueos, cacerolazos, huelgas, movilizaciones, cortes de calles o rutas, ataques a edificios públicos, bancos y empresas privadas, combates callejeros con la Policía, entre otras—. Estas protestas se articularon de hecho hasta lograr la caída del Gobierno, en lo que constituyó el *cenit* de la crisis política desatada por la Alianza, que expresaba cabalmente la licuación de su poder político. Tras la renuncia de De la Rúa, el PJ fue el encargado de asumir la conducción del Estado, dado el poder institucional con el que contaba como mayoría del Senado y primera minoría de la Cámara de Diputados.

Conclusiones

Desde su contundente triunfo en octubre de 1999, la Alianza generó la más acelerada pérdida de consenso social desde el retorno de la democracia. En diciembre de 2001, la Alianza abandonó el Gobierno anticipadamente, en medio de una insurrección popular, a la que no pudo contener, aun con la suspensión de las garantías constitucionales.

Como hemos sostenido en estas páginas, en la debacle de la Alianza confluyeron el rechazo a las políticas de ajuste, el ascenso de la protesta social y la continuidad de prácticas de corrupción. La Alianza continuó con las políticas económicas neoliberales de la administración anterior, gestionando la crisis económica con base en el ajuste fiscal y el impulso a la flexibilización laboral para la baja del costo salarial y la recuperación de la rentabilidad empresarial. Esta política tenía un doble objetivo: por un lado, contener el déficit fiscal para mantener el crédito externo que permitía pagar la deuda pública; por otro lado, mejorar las condiciones de la inversión capitalista para reactivar la economía. Ambos objetivos contribuían al sostenimiento de la Convertibilidad.

Los sucesos de 1999-2001 mostraron la inviabilidad de esta política. Los diferentes ajustes no revirtieron la delicada situación fiscal y financiera, pero contribuyeron a profundizar la recesión y generaron una degradación de las condiciones de vida de los sectores medios y los trabajadores de las grandes ciudades, que habían sido fundamentales para su triunfo en 1999. Asimismo, la implementación de las políticas neoliberales enfrentó a la Alianza con denuncias de corrupción en su contra, lo que evidenció la continuidad de aquellas prácticas en las que había centrado sus críticas desde la oposición. Además, las políticas neoliberales contribuyeron al ascenso de la protesta social, que ganaba intensidad y coordinación entre las organizaciones piqueteras y los sindicatos, con un fuerte crecimiento de la lucha de los desocupados. Todo ello erosionó la legitimidad de la Alianza, que ingresó en un camino de desintegración (expresada en las renuncias del vicepresidente y los principales dirigentes del Frepaso al Gobierno, así como del sector alfonsinista de la UCR).

La crisis política se puso de manifiesto en el fallido ajuste de marzo, en las elecciones legislativas de octubre y en la rebelión popular de diciembre de 2001. En marzo, el ajuste de López Murphy fracasó ante la conflictividad social que desató y ante la falta de apoyo de los legisladores de la propia Alianza. Esto

evidenciaba la imposibilidad de presentar las políticas de ajuste como de interés general de la población. Es decir que las necesidades del capital para sostener la Convertibilidad y relanzar la acumulación no podían expresar los intereses de las restantes fracciones sociales.

La crisis política pareció encauzarse con la aprobación de la Ley de Déficit Cero, que fue el mayor ajuste del gasto público primario, lograda merced a un acuerdo con el PJ en el Congreso. Pero el Déficit Cero condujo a la economía a la depresión, potenciando los efectos negativos de las políticas neoliberales en cuanto a las condiciones de vida de la población, y generando al mismo tiempo una nueva oleada de conflictividad social que agravó la crisis política.

De esta manera, la crisis política volvió a expresarse en las elecciones legislativas de octubre. En ellas, el emergente principal fue el rechazo de la ciudadanía a los partidos mayoritarios, que aparecían como los responsables de la crisis. Este rechazo tomó cuerpo en el “voto bronca”, denominación que adquirió el notable crecimiento de los votos en blanco y nulos. La Alianza dilapidó su capital político, con resultados significativamente más bajos en los distritos en los que había ganado las elecciones legislativas de 1999. Esta pérdida de apoyo fue acompañada de la fuga de votos del PJ, aunque de una intensidad menor. En contraposición, las únicas fuerzas que crecieron en su caudal electoral fueron los partidos de izquierda y centro-izquierda, a saber, los más críticos del neoliberalismo y la corrupción gubernamental, y que acompañaban las luchas populares o se adherían a ellas.

Al final, la crisis política se puso violentamente de manifiesto con la rebelión popular de diciembre de 2001, tras el corte del crédito internacional, las restricciones a los depósitos bancarios, el brutal desplome de la actividad económica y el estado de sitio decretado por De la Rúa para contener las protestas. Esta rebelión popular sepultó la Alianza, las políticas neoliberales de gestión de la crisis y la Convertibilidad, abriendo un período de cambios políticos y económicos que se prolongan hasta la actualidad.

Referencias

1. Abal Medina, Juan. 2004. *La muerte y la resurrección de la representación política*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
2. AF. Ámbito Financiero. Banco de Datos. EMBI+ Argentina. [En línea] <http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=1>

3. BCRA. Banco Central de la República Argentina. Banco de datos. [En línea] www.bcra.gov.ar
4. BCRA. 2001a. *Boletín Monetario y Financiero. Cuarto Trimestre de 2000*. Buenos Aires: Banco Central de la República Argentina.
5. BCRA. 2001b. *Informe al Honorable Congreso de la Nación, Año 2000*. Buenos Aires: Banco Central de la República Argentina.
6. Beltrán, Gastón. 2014. El empresariado argentino frente a la crisis. Alianzas, conflictos y alternativas de salida en la etapa final de la convertibilidad. En *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, eds. Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani, 295-344. Buenos Aires: Siglo XXI.
7. BO. 2000a. *Decreto 430/2000, Reducción de las retribuciones del personal del sector público nacional*. Buenos Aires: Boletín Oficial de la República Argentina.
8. BO. 2000b. *Resolución General 839/2000. Impuesto a las Ganancias*. Buenos Aires: Boletín Oficial de la República Argentina.
9. BO. 2000c. *Ley 25.250, de Reforma Laboral*. Buenos Aires: Boletín Oficial de la República Argentina.
10. BO. 2001. *Ley 25.453, de Equilibrio Fiscal*. Buenos Aires. Boletín Oficial de la República Argentina.
11. Bonnet, Alberto. 2008. *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Buenos Aires: Prometeo.
12. Brenner, Robert. 1998. The Economics of Global Turbulence. *New Left Review*, Special Issue: 1-265.
13. Cavallo, Domingo. 1999. Para volver a crecer. *La Nación*, 20 de agosto.
14. Cheresky, Isidoro. 2003. Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. Fluctuación del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de representación. En *De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina, 1999 y 2001*, eds. Isidoro Cheresky y Jean-Michel Blanquer, 19-51. Rosario: Homo Sapiens.
15. Delamata, Gabriela. 2002. De los 'estallidos' provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas. *Nueva Sociedad* 182: 121-138.
16. De la Rúa, Fernando. 1999. Exposición del candidato a Presidente de la Nación. *5ª Conferencia Industrial Argentina*, Buenos Aires, 24-26 de agosto.
17. De Luca, Miguel. 2007. Argentina: instituciones débiles, economía a los tumbos. *Relações Internacionais* 13: 1-13.
18. Dikenstein, Violeta y Marina Gené. 2014. De la creación de la Alianza a su vertiginosa implosión. Reconfiguraciones de los elencos políticos en tiempos de crisis. En *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, eds. Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani, 35-79. Buenos Aires: Siglo XXI.
19. DNE. 2014a. Elecciones Nacionales. 14 de octubre 2001. Dirección Nacional Electoral. [En línea] http://elecciones.gob.ar/resultados-historicos.php#.U4qc3_ldXyo
20. DNE. 2014b. Elecciones nacionales. 24 de Octubre 1999. Escrutinio definitivo [En línea] http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_aletorales/dine/infogral/RESULTADOS%20HISTORICOS/1999

21. Donaire, Ricardo y Germán Rosatti. 2010. Estructuras económico sociales concretas que constituyen la formación económica de la Argentina (1980-2001). *PIMSA. Documentos y Comunicaciones 2010*: 50-103.
22. Escolar, Marcelo, Ernesto Calvo, Natalia Calcagno y Sandra Minvielle. 2002. Últimas imágenes del naufragio. Las elecciones del 2001 en Argentina. *Desarrollo Económico* 162: 25-44.
23. Eskenazi, Matías. 2009. El espectro de la dolarización: discutiendo las interpretaciones sobre la disputa interburguesa en el origen de la crisis de la convertibilidad. En *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, eds. Alberto Bonnet y Adrián Piva, 147-188. Buenos Aires: Ediciones Continente.
24. Farinetti, Marina. 2002. La conflictividad social después del movimiento obrero. *Nueva Sociedad* 182: 60-75.
25. Filgueiras, Luiz. 2012. *História do Plano Real. Fundamentos, impactos e contradições*. São Paulo: Boitempo Editorial.
26. FMI. 2004. *Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991-2001*. Washington: Fondo Monetario Internacional.
27. FMI. 2001. *Informe anual 2001*. Washington: Fondo Monetario Internacional.
28. Gaggero, Jorge y Juan Carlos Gómez Sabaini. 2002. *Argentina: cuestiones macro-fiscales y reforma tributaria*. Buenos Aires: CIEPP.
29. Gómez, Marcelo. 2009. La acción colectiva sindical y la recomposición de la respuesta política estatal en la Argentina 2003-2007. En *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales*. Volumen II, eds. Julio César Neffa, Enrique de la Garza Toledo y Leticia Muñoz Terra, 161-205. Buenos Aires: Clacso.
30. Holloway, John. 2002. *Change the World without Taking Power*. Londres: Pluto Press.
31. Hopenhayn, Bernardo, Jorge Schvarzer y Hernán Finkelstein. 2002. El tipo de cambio real en perspectiva histórica. Aportes para un debate. [En línea] <http://home.econ.uba.ar/economicas/sites/default/files/cespacoyuntura7.pdf>
32. INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. *Banco de Datos*. [En línea] <http://www.indec.gov.ar>.
33. Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo. 2006. Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, ed. Gerardo Caetano, 49-92. Buenos Aires, Clacso.
34. Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo. 2003. Social Struggles in Present Day Argentina. *Bulletin of Latin American Research* 22 (2): 201-213.
35. Klachko, Paula. 2007. Las formas de organización emergentes del ciclo de la rebelión popular de los '90 en la Argentina. *PIMSA. Documentos y Comunicaciones 2007*: 155-198.
36. *La Nación*, 2000. Fue aprobada la reforma laboral. 12 de mayo de 2000
37. Lattuada, Mario. 2006. *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

38. Lozano, Claudio y Martín Schorr. 2001. *Estado nacional, gasto público y deuda externa*. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación-CTA.
39. Marticorena, Clara. 2014. *Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los noventa a la posconvertibilidad*. Buenos Aires: Imago Mundi.
40. Martínez, Ricardo, Pablo Lavarello y Daniel Heymann. 1998. *Inversión en la Argentina: aspectos macroeconómicos y análisis el destino de los equipos importados*. Buenos Aires: Centro de Estudios para la Producción.
41. Merino, Gabriel. 2012. El Movimiento Obrero Organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT disidente. *Sociohistórica* 30: 87-119.
42. MI-SAPE. 2008. *Historia electoral argentina: 1912-2007*. Buenos Aires: Ministerio del Interior-Subsecretaría de Asuntos Políticos y Electorales.
43. Nemiña, Pablo. 2012. Del blindaje a la intransigencia. Comportamiento del FMI durante la crisis económica argentina (2000-2001). *Ciclos. En la historia, la economía y la sociedad* (40): 219-243.
44. Novaro, Marcos y Vicente Palermo. 1998. *Los caminos de la centroizquierda. Dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza*. Buenos Aires: Losada.
45. ONP. 2014a. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público Nacional. Base Caja, Mensual, primer trimestre 2001. Oficina Nacional de Presupuesto. [En línea] <http://www.mecon.gov.ar/onp/html/resultado/caja/c2001/1trim01.htm>
46. ONP. 2014b. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público Nacional. Base Caja, Mensual, Año 2001. Oficina Nacional de Presupuesto. [En línea] <http://www.mecon.gov.ar/onp/html/resultado/caja/c2001/oct01.htm>
47. Peralta Ramos, Mónica. 2007. *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
48. Piva, Adrián. 2013. *Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista*. Buenos Aires: Biblos.
49. Piva, Adrián. 2009. Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001. En *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, eds. Alberto Bonnet y Adrián Piva, 147-188. Buenos Aires: Ediciones Continente.
50. Pucciarelli, Alfredo. 2014. Crisis sobre crisis: la Ley de Déficit Cero. Golpe de mercado, retorno a la ultraortodoxia, crisis política y comienzo de la resistencia popular. En *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, eds. Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani, 161-213. Buenos Aires: Siglo XXI.
51. Pucciarelli, Alfredo. 2004. La inversión democrática en Argentina. Declinación económica, decadencia política y degradación institucional. *Cuadernos del CENDES* (56): 51-81.
52. Salvia, Sebastián. 2014. Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 1998-1999. Un antecedente de la 'Mesa de Enlace'. *Mundo Agrario* 15 (28): 1-31.
53. Salvia, Sebastián. 2012. Conflictos y alianzas de la burguesía industrial en la crisis de la Convertibilidad en Argentina (1998-2002). Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

54. Salvia, Sebastián. 2011. El país en riesgo. Crisis financiera y gestión neoliberal en Argentina (1999-2001). *Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados* (26): 111-24.
55. Salvia, Sebastián y Axel Frydman. 2004. Modo de acumulación y relaciones de fuerza entre capital y trabajo en Argentina en los '90. *Herramienta* 9 (26): 31-44.
56. Schamis, Héctor. 2002. Argentina: Crisis and Democratic Consolidation. *Journal of Democracy* 13 (2): 81-94.
57. Schuster, Federico, Germán Pérez, Sebastián Pereyra, Melchor Armesto, Martín Armelino, Analía García, Ana Natalucci, Melina Vázquez y Patricia Zipcioglu. 2006. *Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
58. Sidicaro, Ricardo. 2006. *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*. Buenos Aires: Eudeba.
59. Torre, Juan Carlos. 2003. Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria. *Desarrollo Económico* 42 (168): 647-665.
60. Vilas, Carlos. 2006. Neoliberal Meltdown and Social Protest: Argentina 2001-2002. *Critical Sociology* 32 (1): 163-186.
61. Wainer, Andrés. 2010. Clase dominante, hegemonía y modos de acumulación. La reconfiguración de las relaciones de fuerza en el interior de la burguesía durante la crisis y salida de la convertibilidad (1998-2003). Tesis de Doctorado. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires.



Sebastián P. Salvia es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), investigador del Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea de la Universidad Nacional de Quilmes (IESAC-UNQ), becario Postdoctoral del Conicet, con asiento en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (IdIHCS-UNLP). Entre sus últimas publicaciones están: “The Boom and Crisis of Convertibility Plan in Argentina”. *Revista de Economía Política. Brazilian Journal of Political Economy* 35 (2), 2015; y, “Empresarios, convertibilidad y crisis. ¿Entre la dolarización y la devaluación?”. *Iconos* 50, 2014.
Correo electrónico: ssalvia76@gmail.com